

Exclusiones crónicas y ciudadanía flexibles: La soledad de los migrantes latinoamericanos en el espacio transatlántico

por LILIANA SUÁREZ NAVAZ | Universidad Autónoma de Madrid | liliananavaz@gmail.com

El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que Noruega. . . . como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad.

—Gabriel García Márquez,
La soledad de América Latina

Las palabras de Gabriel García Márquez en la recogida del Nobel tienen hoy eco en los millones de Latinoamericanos de las diásporas. Hoy, más incluso que en 1982, América Latina se desborda en densos y precarios tránsitos migratorios hacia Estados Unidos y hacia Europa. Dependencias neocoloniales y exclusiones crónicas agudizadas en la era neoliberal.

Treinta años más tarde esta población diaspórica se ha triplicado.¹ Según el último informe de la Naciones Unidas (ONU), los migrantes y descendientes de latinoamericanos constituyen el segundo grupo diaspórico continental del mundo. Siguiendo el símil del escritor colombiano más universal, los latinoamericanos desterrados podría hoy poblar el conjunto de los cuatro países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, y Dinamarca). Son millones los que encarnan la condición migrante, ciudadanos del sur global arraigados en el norte, la mayoría en Estados Unidos, pero muchos millones ya en Europa, que se ha convertido en un destino preferente desde finales del siglo XX.

Otro tipo de vínculos históricos y culturales han primado en esta emigración, que es mucho más heterogénea que la predominantemente México-Americana asentada en Estados Unidos. En España y Portugal, antiguas metrópolis coloniales, se

han establecido comunidades de latinoamericanos y caribeños en toda su diversidad étnica, racial y de clase. La intensidad de estos flujos de inmigración en la primera década del siglo XXI en España ha sido la más alta del mundo según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED) (2008), convirtiendo un país en el que apenas el 0,6 de su población eran extranjeros en 1981 hasta más de un 12 por ciento en 2012 (Padrón municipal, Instituto Nacional de Estadística). De los más de 5 millones de ciudadanos extranjeros, casi un 45 por ciento de los residentes y más de un 60 por ciento de los trabajadores son de origen latinoamericano. Por ello hablamos de la “latinización” de España,² frente a otros colectivos inmigrantes “vecinos” que antaño tenían más visibilidad y arraigo.

Esta diáspora, este desbordamiento, es consecuencia del impacto del modelo neoliberal en América Latina desde los años ochenta y noventa. Millones de latinoamericanos se han visto forzados a emigrar y establecerse en el norte global, donde luchan por una voz y vida propia, por un acceso en igualdad de condiciones a la ciudadanía. Como mostraré a continuación para el caso de la diáspora latinoamericana en España y Europa, esta lucha se enfrentó a una Europa fortaleza que gestionaba ciudadanía precarias y flexibles, a un régimen neoliberal que favoreció el consumo y endeudamiento a la par que recortaba políticas públicas. Una amiga ecuatoriana, lideresa indígena que conozco hace más de 10 años, lo resume a través de su propia experiencia:

Vinimos por un corto tiempo, porque había mucho trabajo y en Ecuador se nos habían cerrado todas las puertas. Pero no fue así y se fue alargando el tiempo para cumplir objetivos. Ya con trabajo, ya habiendo pagado las deudas queríamos

traer a nuestras familias, pero la normativa exigía tener una vivienda, y fíjate que nos era más difícil alquilar que comprar porque en aquél entonces nos ofrecían hipotecas por nada. Ahora ni podemos volver ni nos es fácil quedarnos. Los bancos se quieren quedar con nuestras casas y desahuciarlos, las familias destrozadas, los estados no nos dan respuesta. Hemos sido víctimas de una gran estafa global...Es un proyecto neoliberal criminal, que nos ha perseguido desde América Latina a Europa, algo que no podremos resolver solitos, no es posible. Nuestra cosmovisión nos ayuda a entender que juntos, pensando a futuro, podremos seguir luchando por nuestra dignidad.³

La diáspora latinoamericana navega en un sistema de exclusiones múltiples que precarizan y ponen en peligro sus vidas en Europa. Un modelo del que, con matices, participan los países de América Latina de donde proceden estos migrantes. La soledad de estos migrantes es transnacional y profunda.

Exclusiones crónicas y “ciudadanía flexibles” en el espacio transatlántico

La solidaridad con nuestros sueños no nos haría sentir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo

—Gabriel García Márquez,
La soledad de América Latina

El legado colonial ha marcado las relaciones entre el sur de Europa y de América. Este *espacio transatlántico iberoamericano*, aunque configurado por un cronotopo distinto y en alguna medida

alternativo al anglosajón, se arraiga en exclusiones epistémicas neocoloniales que pueblos indígenas y afroamericanos están buscando revertir teórica y políticamente, y otras minorías, como los herederos de sefarditas, gitanos o moriscos, visibilizan desde imprevisibles periferias.

El imaginario de pertenencia y fraternidad “iberoamericana” se reproduce aún hoy por los discursos y prácticas de élites a los dos lados del espacio Atlántico. El gobierno de la movilidad a través de este espacio transatlántico ha sido siempre regulado por las élites, quienes además de transitarlos durante siglos en ambas direcciones, expulsaban a la población “excedente” o “exiliada” de tanto en tanto. Las dictaduras del siglo XX marcaron la huida de españoles o portugueses hacia América Latina, y después de argentinos, chilenos, uruguayos o brasileños en la península Ibérica. Este imaginario de pertenencia y fraternidad, por tanto, se sostiene sobre un estrato profundo de exilios y destierros.

Hacia finales de siglo XX, las crisis económicas y la ausencia de futuro expulsa a cientos de miles de latinoamericanos quienes, ante el bloqueo de la frontera norteamericana se dirigen hacia una España que acababa de firmar el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986 y estaba en plena expansión económica. Este segundo flujo de emigración latinoamericana ya no es de clase media blanca como la anterior ni está políticamente perseguida. Huyen más bien de las consecuencias de las políticas de ajuste y el mal gobierno que priva a la gente corriente de posibilidades de futuro. Aprovechando los vínculos históricos que no exigían visas o permitían solicitar la nacionalidad heredada de abuelos y otros ancestros, las clases populares y medias latinoamericanas se instalan en la península

ibérica y otros países europeos con vocación de permanencia.

Las nuevas leyes de extranjería del sur de Europa están vinculadas a una lógica securitaria que refuerza la construcción de una “Europa fortaleza” y criminaliza a todos los inmigrantes del sur, los denominados “no comunitarios”. Las dos primeras normativas logran con éxito cerrar una primera fase de “refronterización del Mediterráneo”, en la que los mecanismos de exclusión jurídica blindan la entrada legal a los “no comunitarios”, o inmigrantes del sur. El “pánico social” se crea mediáticamente con los iconos de las pateras que cruzan el estrecho y más recientemente los “asaltos a las vallas” en el territorio africano de las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. Mientras tanto, millones de latinoamericanos acceden silenciosamente al país a través de los principales aeropuertos del país con la complacencia de los agentes fronterizos, sin focos ni atención mediática. Algunos autores han descrito esta estrategia como un esfuerzo no confeso de sustitución de colectivos africanos por latinoamericanos, representados de forma más amable en la prensa y los discursos políticos como cómo “culturalmente más cercanos” y parte de la “familia hispano-ibero-americana”.

Pero al igual que el resto de mano de obra no cualificada internacional de la que depende el desarrollo económico neoliberal del sur de Europa, los latinoamericanos que entraron con visados de turistas pronto caen en una “irregularidad sobrevenida” de la que es muy difícil escapar. Esta segunda la denominamos la “refronterización del Atlántico”, en la que bajo un discurso neocolonial hispanista se reabren las exclusiones crónicas heredadas de la etno-estratificación colonial —un sistema de “castas” adaptado a la nueva retórica

del “racismo igualitario”—, en una particular articulación con las nuevas exclusiones específicas al mercado laboral global neoliberal. En un país como España, con un sector informal de la economía que llega a alcanzar del 20–30 por ciento y que afecta sobre todo a los sectores económicos donde se insertan los inmigrantes (construcción, servicios, agricultura), es complicado obtener el contrato que permite obtener los “papeles” y salir de esa “irregularidad sobrevenida”.

Etnográficamente hemos constatado como esta peregrinación por los papeles cristaliza en una posición subalterna, dependiente, y que nunca parece resolverse. La exclusión legal puede solucionarse temporalmente con el acceso a un permiso o a la nacionalidad, pero para el resto de la familia y el colectivo se mantiene la búsqueda de salidas a través de los varios cauces administrativos puestos en marcha por el estado bajo la lógica de la “excepcionalidad”: “cupos”, regularizaciones masivas, “contingentes” de trabajadores “reclutados en origen” y otras medidas de gobernanza del espacio migratorio Atlántico.

Una vez abierta la crisis, una nueva Ley de Extranjería, 2/2009, hizo más restrictivo el acceso a los derechos de ciudadanía y a los programas de integración. Con el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria la fragilidad económica del sur de Europa se hace evidente. La creciente pobreza desencadenada afecta a los inmigrantes de manera dramática con casi un 40 por ciento de desempleo. La tragedia de los desahucios, efecto del colosal engaño de los créditos “abusivos” de los bancos con las personas humildes, afecta en un 40 por ciento a los inmigrantes con cadenas de avales entre amigos y familiares que han entrampado en una situación imposible a cientos de miles de latinoamericanos.

En los últimos años, detenciones arbitrarias, los redadas racistas, y la explotación laboral se han acentuado. La Directiva de retorno 2008/115/CE, conocida con el sobrenombre de “la directiva de la vergüenza” crea un clima de pánico entre los migrantes y notas de prensa de varios países Latinoamericanos y asociaciones de derechos humanos en las dos costas del Atlántico. De poco han servido estas declaraciones.

Eufemísticamente denominada “retorno voluntario”, la directiva ha creado un nuevo giro en las políticas migratorias hacia la detención, expulsión, y/o retención de cualquier inmigrante que tenga irregularidades administrativas en centros habilitados al efecto: “los Estados deben legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un periodo de salida mínimo de 7 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos. ... La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse hasta 12 meses más”. Son los nuevos “Guantánamos” que han proliferado en una Europa carcelaria, CIE’s (Centros de Internamiento de Extranjeros) donde cientos de latinoamericanos han sido sometidos a este régimen medieval de privación de derechos.

La soledad de la condición expatriada y las estrategias emergentes en la diáspora

El desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad

—Gabriel García Márquez,
“La soledad de América Latina”

La globalización ha creado *campos migratorios transnacionales* donde estados y sociedad civil, migrantes en la diáspora y

sus familias en América Latina participan de forma diversa y a menudo perversa en la “reproducción de sujetos móviles y lógicas de pertenencia incompletas”. Este sistema de gobernanza transnacional ha producido importantes transformaciones políticas y teóricas que han revalorizado la diáspora como un actor económico y político relevante en la globalización. Los estados involucrados han diseñado programas de atracción de remesas y turismo, se han firmado acuerdos de reciprocidad en materia de seguridad social, se ha redefinido las estrategias electorales a nivel transnacional y ha habido cambios legislativos para incorporar el voto emigrante. A nivel constitucional ha habido cambios para permitir la doble ciudadanía, y en los procesos constituyentes se ha redefinido el espacio parlamentario para incorporar la voz y el voto de asambleístas en el exterior.

No obstante, estas medidas están más pensadas para la época de bonanza donde las remesas cotizaban en los mercados de valores del PNB. El dramático impacto de la crisis neoliberal en los trabajadores latinoamericanos de la diáspora no ha sido apropiadamente gestionado por los estados involucrados. Ante la tragedia de las diásporas latinoamericanas, los estados actúan como si condición migratoria fuera anómala y temporal, remediable si “se da vuelta atrás”, como parece sugerir el énfasis en los programas de retorno desde ambas orillas del Atlántico. Desde América Latina los nuevos programas de retorno (“retorno positivo” en Colombia, “Bienvenido a casa” desde Ecuador, entre otros como Perú o Bolivia), usan retóricas nacionalistas que actúan como mero bálsamo para una exclusión profunda, porque los programas apenas se dotan con recursos y no adquieren credibilidad ante el migrante. Desde España también se pusieron en marcha tres programas de apoyo al retorno

voluntario basados en la capitalización de prestaciones para trabajadores extranjeros o el apoyo a planes de negocios, pero con la contrapartida de renunciar a volver al país en tres años y al permiso de trabajo obtenido. El impacto de estos programas ha sido anecdótico.

Frente al énfasis de los estados en el “retorno” y la “vuelta atrás”, los migrantes parecen convencidos del vínculo positivo entre movilidad y desarrollo. Aunque los estados sigan categorizando a las diásporas bajo la lógica de la excepcionalidad, parece que los migrantes siguen valorando su movilidad sectorial o geográfica, diversificando sus estrategias laborales y educativas como respuesta a la crisis. Algunos jóvenes vuelven a Ecuador, por ejemplo, para estudiar una carrera universitaria de forma más accesible (dadas las subidas de tasas y recortes en España), pero teniendo en mente el mercado laboral europeo. En otros casos, los que se desplazan son alguno de los progenitores, hacia Alemania o Gran Bretaña, dejando el “cuartel general” en España.

Los migrantes saben que ahora son “desechables” por el sistema neoliberal. Se diseñan políticas públicas desde los estados de origen o destino bajo la más evidente descoordinación y negligente gobernanza de los circuitos migratorios. Los clientelismos nacionales se replican a nivel transnacional y las garantías jurídicas adquiridas en los tránsitos migratorios se transan a cambio de dinero para el retorno. Pero los tránsitos no se han realizado en vano, y en las diásporas emergen nuevas herramientas de concienciación, información, y lucha ante la nueva situación. Las poblaciones migrantes latinoamericanas navegan en el espacio transatlántico a través de la más dramática de las contradicciones neoliberales: el hecho de que la movilidad de los

Ayotzinapa: ¿Fue el Estado? Reflexiones desde la antropología política en guerrero

por ROSALVA AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-México); Red de Feminismos Descoloniales | aidaher2005@gmail.com

y MARIANA MORA | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-México); Red de Feminismos Descoloniales | mariana_mora@yahoo.com

trabajadores es potenciada a la vez que criminalizada, ensalzada a la par que ninguneada.

Notas

- ¹ Organización Internacional para las Migraciones, “Informe sobre las migraciones en el mundo 2013: El bienestar de los migrantes y el desarrollo”, http://www.iom.int/cms/wmr2013_sp.
- ² Estadísticamente las personas de origen latinoamericano son más del 45 por ciento de la población extranjera en España. A esto hay que añadir aquellos que han obtenido la nacionalidad española, para cuyo acceso tienen preferencia por sobre el resto de extranjeros (junto con sefarditas, filipinos, y guineanos): casi un 80 por ciento de las más de 800.000 nacionalidades concedidas desde 2002 hasta 2012 eran latinoamericanos.
- ³ Lideresa kichwa ecuatoriana en Madrid, representante de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid. ■

Como socias de LASA y como antropólogas que desde hace varios años venimos trabajando en torno a temas relacionados con la violencia, la seguridad y los derechos humanos en el estado mexicano de Guerrero, queremos aprovechar el espacio que *LASA Forum* nos brinda para compartir algunas de nuestras reflexiones en torno a la crisis de Estado que se vive actualmente en México y al papel de nuestra disciplina en contextos de emergencia nacional. El asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en manos de policías municipales que presuntamente los entregaron a sicarios de la organización Guerreros Unidos el 26 y 27 de septiembre del 2014, ha despertado la indignación de la sociedad mexicana en su conjunto. Por primera vez en años, por no decir décadas, la respuesta ha sido no solo espontánea, sino masiva; estudiantes, maestros, familias, sindicatos, colectivos han tomado las calles a todo lo largo y ancho del país exigiendo la aparición con vida de los estudiantes y el alto a la impunidad, utilizando consignas que inyectan una dosis de realismo crudo, incluyendo interrogantes como, ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? ¿Qué cosecha un país que mata y desaparece su futuro?

La participación del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa como autores intelectuales de los asesinatos y desapariciones, puso una vez más en evidencia lo que desde hace años ha sido un secreto a voces: que en muchas regiones del país las fronteras entre el crimen organizado y el Estado son diluidas o incluso inexistentes. En este caso, de acuerdo a declaraciones oficiales de la

Procuraduría General de la República (PGR), tanto Abarca como su esposa mantenían lazos estrechos con Guerreros Unidos, grupo vinculado al tráfico de narcóticos y otros negocios ilícitos. No es que la pareja se corrompió por el crimen organizado o se coludió con actores externos al gobierno, sino que tanto Abarca como Pineda Villa, formaban parte de la misma estructura delictiva. Si desde 2009, ambos habían sido acusados de estar al frente de este grupo, la pregunta es por qué ninguna autoridad tomó medidas en el asunto (ver *Excélsior*, 4 de noviembre de 2014).

Desde los primeros días posteriores al 26 y 27 de septiembre, el gobierno federal intentó disminuir y aislar los hechos, primero reduciéndolos a un fenómeno municipal, en todo caso estatal, separando el papel del Estado de la delincuencia organizada. No fue sino hasta ocho días después de los sucesos que la PGR atrajo el caso; hasta entonces la dependencia había declarado que era un asunto meramente local y de competencia de la Procuraduría Estatal. En la conferencia de prensa el viernes 7 de noviembre, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, intentó deslindar al Estado de los hechos, eliminando de la evidencia presentada la participación de los Policía Preventiva Municipal, silenciando el papel de las Fuerzas Armadas, y dirigiendo la atención exclusivamente a los sicarios de Guerreros Unidos. Según la versión dada a conocer a los medios de comunicación los sicarios llevaron a los 43 normalistas a un basurero donde fueron asesinados e incinerados hasta dejar sólo ceniza como evidencia. Murillo Karam argumentó que la incineración prácticamente imposibilita la recuperación de muestras de ADN para la identificación de los restos.